

abordar sus necesidades en vez de centrarse en los aspectos relacionados con la seguridad y la delincuencia en torno a cómo desapareció la persona. La definición de familia en los casos de migrantes desaparecidos debe ser flexible, teniendo en cuenta la dependencia emocional, y estar en consonancia con los contextos culturales y otros.

Los colectivos comunitarios y los defensores locales, las ONG, las organizaciones civiles de carácter social generalistas y otras organizaciones que apoyan a las familias de migrantes desaparecidos son de vital importancia en ausencia de unas leyes, políticas y salvaguardas adecuadas que permitan a las personas acercarse a las autoridades y recibir su ayuda. Se podría formar un grupo de trabajo con estos actores relevantes y con las familias de los migrantes desaparecidos en cada país para apoyar tanto a las familias como a los organismos gubernamentales pertinentes a compartir la información. Aunque esta cooperación podría comenzar a nivel nacional, el objetivo debería ser crear redes con otros actores a nivel regional y más allá para compartir las mejores prácticas y para ayudar a resolver casos concretos de personas desaparecidas.

El tema de los migrantes desaparecidos no se aborda adecuadamente ni en las políticas ni en las leyes. Un punto de partida podría ser que cada país creara un protocolo que permitiera un enfoque uniforme para la implementación de las disposiciones legales

nacionales e internacionales existentes que protegiera los derechos de las familias de los migrantes desaparecidos. Ese protocolo debería incluir instrucciones para que la recopilación, la conservación y el intercambio de información sea eficiente, y para la colaboración intersectorial en los casos de personas desaparecidas. El protocolo serviría de guía (tanto para las familias como para los colectivos comunitarios, las organizaciones y los organismos públicos que tratan de ayudarles) sobre cómo buscar a su ser querido y cómo acceder a la ayuda.

Marta Sánchez Dionis

msanchez@iom.int @msdionis

Responsable de proyectos, OIM, Proyecto Migrantes Desaparecidos

Kate Dearden *kdearden@iom.int*

Responsable de proyectos, OIM, Proyecto Migrantes Desaparecidos

1. www.iom.int/global-compact-migration
2. Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM www.missingmigrants.iom.int El equipo de investigación estaba compuesto por Gabriella Sánchez, Instituto Danés de Estudios Internacionales; Carlos Arce, Universidad de Córdoba; Tekalign Ayalew Mengiste, Universidad de Adís Abeba; y Samuel Okyere, Universidad de Bristol.
3. Por ejemplo, en el Plan de Acción de Cinco Puntos de la OIM *Fatal Journeys* Volumen 2 (2016) https://publications.iom.int/fr/system/files/fataljourneys_vol2.pdf y en el borrador "Principles on stakeholder interaction with families of missing migrants" (principios sobre la interacción de las partes interesadas con los familiares de migrantes desaparecidos) que está preparando el Proyecto sobre Personas Desaparecidas del CICR www.icrc.org/en/draft-principles-stakeholder-interaction-families-missing-migrants

La búsqueda de la verdad, la justicia y el pasar página durante la pandemia

Danai Angeli

La pandemia ha aumentado los retos de las familias migrantes que pasaban el duelo por el fallecimiento o la desaparición de sus seres queridos. Pero hay maneras prácticas de ayudarles.

Las familias que pasan un duelo tienen derecho a la verdad, a la justicia y a pasar página. Estos derechos fundamentales están reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos, también amparados por el derecho a la dignidad, el derecho a la vida y el derecho a la vida familiar y privada¹. Como mínimo, los Estados deben garantizar que las familias migrantes en proceso de duelo estén informadas sobre la suerte y el paradero de su familiar desaparecido o fallecido, de

reclamar y repatriar sus restos mortales y de darles sepultura para que descansen en paz (Declaración Mitilini de 2018²).

Las respuestas nacionales a la pandemia de la COVID-19 afectaron gravemente a la capacidad de las familias migrantes en proceso de duelo de ejercer esos derechos. Las medidas de contención para detener la propagación del virus a menudo no tuvieron en consideración las necesidades específicas de dichas familias y han dado lugar a más barreras legales y

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

prácticas. A partir de las experiencias de migrantes de ocho países (Grecia, Alemania, Francia, Italia, México, Sudáfrica, EE. UU. y Zimbabue) durante la pandemia, tratamos de demostrar que hay formas prácticas y realistas para que los Estados —de acuerdo con sus obligaciones internacionales— puedan ayudar a las familias migrantes que están en duelo sin menoscabar las respuestas de salud pública³.

Entender la causa del fallecimiento

La incertidumbre constante sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento presunto o confirmado de un ser querido puede pesar mucho en la familia. El derecho internacional de los derechos humanos reconoce que esa angustia y dolor emocional podrían llegar a constituir un trato inhumano y degradante. Por tanto, los Estados tienen la obligación de investigar las muertes sospechosas, hacer rendir cuentas a los responsables y mantener informada a la familia.

La naturaleza aparentemente misteriosa del nuevo virus y la difusión de teorías conspirativas han aumentado la incertidumbre entre las comunidades de migrantes. Para empezar, no se dispone en general de datos oficiales sobre la tasa de transmisión y mortalidad de la COVID-19 entre los migrantes. Muchos Estados, incluidos la mayoría de los europeos y Estados Unidos, no publican las estadísticas de COVID-19 desglosadas por nacionalidad, ni informan por separado sobre la situación de los migrantes.

La incertidumbre se ve aún más exacerbada por las diferentes formas de verificar los fallecimientos por COVID-19 y también por la poca información que se comparte con los parientes más cercanos. En algunos países (como Alemania), la causa del fallecimiento es un apartado confidencial del certificado de defunción que se transmite a la oficina de estadística correspondiente, pero que no se pone a disposición de los parientes debido a las leyes de protección de datos personales. En Nueva York, los certificados de defunción en los que la COVID-19 figuraba como causa del fallecimiento eran recibidos con desconfianza por muchas familias, especialmente cuando la persona gozaba previamente de buena salud y en los casos en los que no se tenía acceso al historial médico o a cualquier otra información sobre la causa de la defunción. Para las familias que se encuentran en el extranjero, puede ser aún más difícil obtener información de las circunstancias

del fallecimiento debido a las restricciones de viaje y sobre quién tiene derecho a acceder a la documentación pertinente.

Los migrantes —en especial los indocumentados— lo han tenido más difícil para acceder a la asistencia sanitaria por diversas razones desde el estallido de la pandemia. Como consecuencia, un número indeterminado de casos de COVID-19 y otras afecciones médicas no han sido tratadas, y se han quedado sin diagnosticar una cifra desconocida de defunciones extrahospitalarias. La publicación de datos oficiales y transparentes sobre la tasa de transmisión y mortalidad entre los migrantes contribuiría a acabar con las sospechas y especulaciones, y ayudaría a las familias que buscan la verdad y piden justicia y responsabilidades.

En México, por ejemplo, las autoridades publican cada día datos completos y abiertos sobre los casos de COVID-19, las hospitalizaciones y los fallecimientos. Además del seguimiento de variables como la edad, el sexo, la ubicación y las comorbilidades, México también incluye información sobre la nacionalidad, la situación migratoria y el país de partida. Además, ha estado publicando informes epidemiológicos semanales sobre la COVID-19 entre los migrantes, en los que se incluía el número total de casos sospechosos y confirmados, los países de origen, las hospitalizaciones y las defunciones. Aunque las estadísticas oficiales no dan cuenta del número total de fallecidos (dado que México es uno de los países que menos test hace), el Gobierno ha dado un importante paso al poner los datos oficiales a disposición del público en un formato abierto y descargable.

Los procedimientos para solicitar certificados de defunción y ampliar la información sobre las circunstancias de un fallecimiento deberían ser accesibles y hacerse cargo de las dificultades adicionales a las que tienen que enfrentarse las familias en duelo que se encuentran en el extranjero. Las organizaciones civiles de carácter social, las asociaciones de migrantes y los grupos de apoyo pueden ayudar a las familias en proceso de duelo a realizar los trámites administrativos; es esencial que estos agentes se mantengan operativos y accesibles durante toda la pandemia.

Es necesario aumentar la concienciación no solo hablando de cómo contener la propagación del virus, sino también proporcionando información completa y accesible sobre la

asistencia sanitaria, las perspectivas en caso de diagnóstico positivo y las razones de las medidas de contención que afectan directamente a las comunidades de migrantes. Contar con las comunidades de refugiados y migrantes, las organizaciones de base y otros grupos de apoyo para compartir esta información podría ser una forma efectiva de superar la desconfianza profundamente arraigada hacia las autoridades.

Darles sepultura para que descansen en paz

El derecho internacional reconoce el derecho humano a enterrar y honrar a los familiares fallecidos. Garantizar el respeto por las preferencias y los rituales funerarios se ha vuelto especialmente problemático durante la pandemia, al haber tenido que imponerse limitaciones con respecto a la asistencia y la manipulación de los cadáveres. La pandemia también ha exacerbado las limitaciones financieras y temporales. La creciente falta de espacio en las morgues ha acelerado los procedimientos funerarios, lo que ha limitado las opciones de las familias sin recursos que necesitan más tiempo para recaudar fondos y ha restringido su capacidad para trasladar los restos mortales a otro lugar. Las restricciones a los viajes internacionales fueron barreras adicionales. La situación se complica más cuando los restos mortales no están identificados o cuando la familia tiene dudas sobre la identidad del difunto.

Los protocolos forenses deberían abordar expresamente la forma en que deben recopilarse y conservarse los datos post mortem y ante mortem relevantes para una futura identificación. Un ejemplo claro ha sido el de los protocolos forenses COVID-19 de México para el tratamiento de los restos mortales no identificados. Estos protocolos describen cómo deberían tratarse los cadáveres y cómo se han de recopilar y almacenar los datos en vista de la pandemia. También prohíben la incineración de restos mortales no identificados. En caso de que sea necesario realizar una gestión masiva, todos los cadáveres no reclamados —identificados o no— han de ser sepultados en fosas individuales para restos COVID-19, y la fiscalía y los servicios forenses deben registrar dónde se han enterrado estos.

La ayuda financiera que los Estados ofrecen para paliar los efectos de la pandemia podría incluir ayuda para los gastos funerarios. Un paso importante en esta dirección lo ha dado el programa de

ayudas a la sepultura de la ciudad de Nueva York, al que pueden acogerse las familias migrantes, incluidas las indocumentadas.

El establecimiento de un visado nacional con fines funerarios o de identificación sería una forma efectiva y práctica de ayudar a las familias migrantes en proceso de duelo que viven en el extranjero. En Alemania, por ejemplo, el visado familiar —que se ha mantenido a lo largo de la pandemia— permite a los familiares, e incluso a miembros de la familia extensa, visitar el país de forma temporal para asistir a un funeral.

Los protocolos de los servicios hospitalarios y funerarios deberían ser flexibles para dar cabida a los ritos funerarios siempre que sea posible. En Alemania, aunque los parientes no pueden llevarse el cadáver a casa, sí se les permite, en determinadas circunstancias o lugares, realizar los rituales funerarios en la habitación del hospital. En Zimbabue, se pone a disposición de las familias (y otros miembros de la comunidad) que no puedan asistir al funeral en persona, tienen a su disposición su retransmisión en directo.

La repatriación de los restos mortales

Para las familias en proceso de duelo, es fundamental poder llevar a casa al familiar fallecido para cerrar esa etapa. Incluso antes de la pandemia, la repatriación de restos mortales era un procedimiento complejo y costoso. Desde la pandemia, estos se han vuelto más costosos aún y más burocráticos, ya que muchos Estados han establecido restricciones adicionales para evitar contagios. Al mismo tiempo, la suspensión de los servicios consulares en muchos países, sumado a las restricciones para viajar, se lo ha puesto más difícil a las familias que viven en el extranjero. No es raro, por tanto, que estas familias no opten por la repatriación o encuentren formas poco ortodoxas de llevarla a cabo. Como en Grecia, donde muchas optan por repatriar solo los huesos, que se ponen a disposición de los familiares entre tres y cinco años después del entierro. En Nueva York, las familias mexicanas elegirían incinerar al familiar, en contra de sus creencias, ya que la repatriación de esos restos es más fácil. Todo esto puede suponer un gran peso para las familias supervivientes. Es urgente mejorar las normativas nacionales y la coordinación internacional para facilitar los procedimientos de repatriación.

No se puede dejar solas a las familias migrantes durante el duelo. Prestar una

marzo 2021

www.fmreview.org/es/edicion66

asistencia adecuada no es solo un deber moral, sino también una obligación legal basada en normas de derechos humanos consolidadas.

Danai Angeli Danai.angeli@bilkent.edu.tr

Profesora adjunta, Universidad de Bilkent; Asesora, Last Rights Project

1. Last Rights (2019) Extended Legal Statement and Commentary. bit.ly/Last-Rights-2019-legal-statement

2. La Declaración Mitilini para el tratamiento digno de todas las personas desaparecidas y fallecidas y sus familias como consecuencia de los viajes migratorios, adoptada el 11 de mayo de 2018
<https://docs.google.com/document/d/1dNiarOI0WkDTvE7cuOqC9x8v3vFTKpCxp80jsXYHTXc/view>
3. Last Rights (2021) *Every Body Counts: Death, Covid-19 and Migration. Understanding the Consequences of Pandemic Measures on Migrant Families* bit.ly/Last-Rights-2021-EveryBodyCounts

Los migrantes desaparecidos y sus familias: un llamamiento a una mayor cooperación internacional

Sylvie van Lammeren y Florian von König

Para que los actores puedan localizar a los migrantes desaparecidos y asistir mejor a sus familias es fundamental reforzar el compromiso con la coordinación y la colaboración. Las nuevas iniciativas muestran el camino.

La búsqueda de migrantes desaparecidos es una empresa transnacional, incluso transcontinental, que requiere de la cooperación de un amplio abanico de actores¹. Carecíamos de un marco intergubernamental mundial para ella, pero eso cambió con la inclusión (a instancias del CICR) del Objetivo 8 en el Pacto Mundial para la Migración. Más de 150 Estados se comprometieron a establecer esfuerzos coordinados de cara al problema de los migrantes desaparecidos, incluyendo la creación de unos estándares para la recopilación y el intercambio de información, y estableciendo una coordinación transnacional para llevar a cabo la identificación y la comunicación con las familias.

Sin embargo, para que los compromisos políticos se traduzcan en acciones se necesita información para cuantificar y analizar el problema. Se trata de un reto notorio, ya que es difícil conseguir cifras fiables sobre los migrantes desaparecidos debido, entre otras cosas, a la naturaleza a menudo clandestina de la migración. Además, la percepción del problema suele estar distorsionada, lo que refleja que tanto la información aportada por los medios de comunicación como la atención pública se centran en el contexto mediterráneo o centroamericano, y obvian la gran extensión de los flujos de migración entre países africanos, asiáticos o de Oriente Medio. Iniciativas como el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o el Observatorio Africano para la Migración y el Desarrollo (recientemente creado por la Unión Africana)

son, por tanto, fundamentales para crear un punto de partida para la política y para ofrecer el muy necesario análisis.

Al mismo tiempo, se necesitan marcos concretos para coordinar los esfuerzos de los actores relevantes a lo largo de las rutas migratorias para prevenir² y resolver los casos de migrantes desaparecidos, y eso incluiría la recopilación, compilación, intercambio y comparación de información procedente de diferentes fuentes. Examinar las prácticas existentes y ofrecer unas directrices sobre cómo lograrlo es algo que el Proyecto del CICR sobre Personas Desaparecidas³ persigue desde su lanzamiento en 2018.

Reunir a las partes interesadas

Basándose en su dilatada experiencia en este ámbito, el CICR creó el Proyecto sobre Personas Desaparecidas para crear una comunidad mundial de partes interesadas con el fin de desarrollar conjuntamente unas directrices que mejorasen la respuesta⁴. En los debates que se produjeron en un taller de expertos⁵ celebrado en 2019, unos 60 profesionales que representaban a Estados, organizaciones y familias de migrantes desaparecidos confirmaron algunos de los principales obstáculos: la ausencia de prácticas y normas establecidas en el ámbito de la recopilación de información, los retos para proteger los datos personales sensibles y las deficientes prácticas forenses. Los participantes también hicieron hincapié en los retos específicos a los que se enfrentan las familias de las personas desaparecidas, como la dificultad para acceder